

C.A. de Santiago

Santiago, tres de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Que, en estos autos Rol Ingreso de Corte N° 24-2023, comparece don Daniel Lagos Sandoval, abogado, en representación Empresa Pesquera Apiao S.A., e interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, de conformidad al artículo 28 de la Ley 20.285, por la dictación de la Decisión de Amparo Rol C 7916-22 de fecha 20 de diciembre de 2022, que acogió el amparo de acceso a la información en contra del Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Lagos, referido a la entrega de información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en periodo determinado, por los centros de engorda de mitílidos que se indican, obligando con ello a su representada a entregar información que contravendría lo dispuesto por la Ley y la Constitución Política, afectándole gravemente sus intereses y derechos.

Fundamenta su reclamo de Ilegalidad, indicando que el 3 de agosto de 2022, Hernán Espinoza Zapatel solicitó al Servicio Nacional de Pesca Región de Los Lagos (“Sernapesca”) la información de cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo que señala, por los centros de engorda de mitílidos en la Región de Los Lagos, individualizando los titulares, resolución de otorgamiento, Registro Nacional de Acuicultura, comuna y periodo. En



específico, respecto de la Pesquera Apiao referido a Resoluciones N° 104122, 103769, 102786 y 103725, de la comuna de Curaco de Velez, en el período de 2010 a 2022.

Refiere que en uso de su derecho, APIAO se opuso fundadamente a la entrega de la información, por lo que Sernapesca respondió el requerimiento y denegó lo solicitado, fundado en la oposición de los terceros interesados en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Añade que el 22 de agosto de 2022, Hernán Espinoza Zapatel dedujo amparo en contra de Sernapesca por la denegación de acceso a la información requerida.

Expone que el Consejo, mediante la resolución reclamada en autos, acogió el amparo deducido en contra de Sernapesca, referido a la entrega de información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo y por los centros de engorda de mitíldidos que se indican.

Sostiene que la resolución recurrida debió rechazar el requerimiento de información por cuanto la entrega de la información solicitada por el requirente afecta el secreto empresarial y los derechos comerciales y económicos de su representada, por lo que ésta tiene justa causa legal para oponerse.

Explicita que la Ley N° 20.285 establece en su artículo 21 las causales de secreto o reserva, siendo específicamente aplicable lo dispuesto en el numeral 2°: “Cuando su publicidad,



comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.

Argumenta que la recurrente es una empresa con trayectoria destacada en el rubro pesquero y de producción de mitílidos, cuyos clientes nacionales como internacionales valoran especialmente sus productos por sobre los de su competencia. En efecto, en la práctica de la acuicultura, tiene especial importancia la cantidad, calidad y distribución geográfica de la producción para efectos de lograr un producto de connotado estándar y calidad en el mercado. En función de ello, su representada ha invertido innumerables recursos económicos y humanos desarrollando investigaciones de gran nivel técnico que permiten -tanto desde el punto de vista biológico como comercial- determinar las oportunidades, especies, ubicación geográfica, condiciones atmosféricas y biológicas, entre otros, para desarrollar sus productos apropiadamente y con los estándares requeridos.

Respalda con documentos que acompaña, que la empresa ha invertido importantes recursos en su proyecto “Nuevo Desperchador”, equipo diseñado y desarrollado para mecanizar el proceso de extracción de la semilla desde el colector, a fin de aumentar la productividad en al menos 4 veces, en comparación con el método manual y con una reducción de costos de al menos un 50%.



Afirma que cuando un tercero ajeno de su empresa, solicita copia de las declaraciones de las cosechas o producciones que ha efectuado ante el Servicio Nacional de Pesca, se estaría revelando la inversión que ha realizado en dicho proyecto, así como también en las distintas mejoras, como en otros proyectos, los cuales han llevado a ser líder del mercado, siendo una ventaja frente sus competidores. Por tanto, dicha información es un activo intangible, clave y fundamental para el desarrollo del giro de su empresa, siendo de suma confidencialidad, por su gran valor económico, tanto actual como potencial.

Alega que la revelación de dicha información a terceros ajenos le implicaría un gran perjuicio económico, al revelar decisiones estratégicas para el desarrollo de su modelo de negocio y que le han permitido situarse como productor mundial.

Indica que la resolución recurrida debió rechazar el requerimiento de información por cuanto, acceder a éste, atenta contra lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, dado que no toda información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado es pública y, precisamente, en este caso, la información requerida por el solicitante no comparte el carácter de “pública”, al no ser un acto, resolución, fundamento ni procedimiento emitido por un Órgano público, sino información que una empresa entregó a Sernapesca en cumplimiento de su



obligación legal. No encontrándose en un supuesto de interés público asociado ni vinculado a información ambiental.

Aduce que el Consejo no justificó su decisión, solo se limitó a reproducir una serie de normas de carácter general sin que ninguna de ellas autorice o establezca una contra excepción al derecho de su parte de oponerse a la entrega de la información por la causal contemplada en el artículo 21 de la Ley 20.285, motivo suficiente para revocar la resolución recurrida.

En consecuencia, pide acoger el presente reclamo de ilegalidad, y dejar sin efecto la decisión impugnada, ordenando que no se entregue la información requerida al configurarse la causal de reserva contenida en el artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285.

2°.- Que, con fecha 17 de febrero de 2023 comparece Ricardo Cáceres Palacios, abogado, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, quien informa el presente reclamo de ilegalidad, solicitando que sea rechazado en todas sus partes, con costas.

Expone que con fecha 3 de agosto de 2022, Hernán Espinoza Zapatel solicitó al Servicio Nacional de Pesca Región de Los Lagos, información referida a cosechas o producciones obtenidas y declaradas ante dicho Servicio, en el periodo y en los centros de engorda de mitílidos que individualiza.

Indica que por Resolución Exenta N° 452, de 19 de agosto de 2022, el Servicio Nacional de Pesca Región de Los



Lagos denegó el requerimiento, fundado en la oposición de los terceros interesados en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Se funda en que el 8 de agosto de 2022, por parte de Pesquera Apiao S.A., y de Cultivos Crosam y, a su vez, el 11 de agosto de 2022 Luis Toledo, manifestaron en tiempo y forma su oposición a la entrega de la información, en base a ser de carácter productiva, no teniendo la categoría de pública y que su divulgación afectaba el derecho de carácter comercial y económico de dichos interesados. Además, advirtió que los requeridos consideraron que la información se relacionaba con la planificación estratégica de las empresas, especialmente referida a su capacidad de producción salmónida, lo que constituye un bien económico estratégico de carácter comercial o económico, conforme a los términos del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

Señala que el 22 de agosto de 2022, Hernán Espinoza Zapatel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.

Añade, que se dio tramitación por el Consejo de este amparo, y el órgano reclamado efectuó su descargo denegando lo pedido de conformidad al artículo 20 en relación al artículo 21 N° 2 de Ley de transparencia, ya que la información solicitada es comercialmente sensible, y su entrega



afecta los derechos e intereses económicos y comerciales de las empresas referidas, amparando sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 21, 24 y 25 de la Constitución Política de la República.

Precisa que el Consejo Directivo de esa Corporación, acordó dar traslado del presente amparo a los terceros involucrados: Empresa Pesquera Apiao S.A., la cual mediante carta de 21 de noviembre de 2022, se opuso a la entrega de la información, por cuanto conceder el acceso a la información afectaría gravemente sus intereses y derechos, en especial los de carácter comercial y económico, ello, atendido a que es una empresa que a lo largo de su trayectoria, se ha destacado en el rubro pesquero y de producción de mitílidos, cuyos clientes nacionales e internacionales valoran especialmente sus productos por sobre los de la competencia.

Que para lograr un producto de connotado estándar y calidad en el mercado, la empresa ha invertido innumerables recursos económicos y humanos desarrollando investigaciones de gran nivel técnico, las que permiten determinar las oportunidades, especies, ubicación geográfica, condiciones atmosféricas y biológicas, entre otros a implementar para desarrollar sus productos apropiadamente y con los estándares requeridos.

Finalmente, da cuenta que el Consejo para la Transparencia, mediante Decisión de Amparo Rol C 7916-22, adoptada el 20 de diciembre de 2022, acogió el amparo



deducido por Hernán Espinoza Zapatel en contra del Servicio Nacional de Pesca Región de Los Lagos, requiriendo lo siguiente: “Entregue al reclamante la información referida a las cosechas o producciones obtenidas y declaradas, en el periodo y en los centros de engorda de mitílidos que se indican, identificados por su Registro Nacional de Acuicultura, ubicados en la Región de Los Lagos, de acuerdo con lo señalado en numeral 1° de lo expositivo del presente Acuerdo”.

Sustenta que analizado el tenor de los principios consagrados en las letras a), c) y d) del citado artículo 11, resulta claro y evidente que estas normas permiten concluir que la información que fue solicitada por el requirente de acceso al SERNAPESCA es pública, sin que a su respecto se configure y acredite la afectación de alguno de los bienes jurídicos protegidos en el inciso 2° artículo 8° de la Constitución Política de la República, por lo que igualmente en aplicación de estos principios es posible descartar la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley de transparencia.

En cuanto al fondo, detalla, que el marco normativo del artículo 86 y 90 quater de Ley de Pesca, artículos 6, 7, 8 y 19 del Decreto N° 129 del Ministerio de Economía, Decreto Supremo N° 319/2001 del Ministerio de Economía sobre Reglamento Sanitario, y Ley N°19.300, es posible colegir que la información que ha sido solicitada, esto es, sobre puntuales cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo consultado de la reclamante, forman parte de los antecedentes



que deben ser proporcionados al SERNAPESCA por el titular de cada uno de los centros de producción, en cumplimiento de la normativa sectorial, y que por lo tanto, obra en poder del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en atención a la función fiscalizadora, en especial para la implementación de programas sanitarios generales y específicos para la operación y manejo de especies hidrobiológica, para evitar la diseminación de las enfermedades, como a su vez para la vigilancia, control o erradicación de las enfermedades de alto riesgo.

Por tanto dicha información no es un acto de mera liberalidad ni únicamente para fines estadísticos, sirviendo la señalada información, de fundamento directo y esencial de actos y resoluciones administrativas relacionadas con el manejo sanitario de mitílidos, habiendo integrado procedimientos administrativos del mismo carácter. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° inciso 2° de la Constitución y artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, tiene el carácter de información pública, salvo que, a su respecto, concorra alguna causal de secreto o reserva legal, siendo la carga de la prueba del secreto le corresponde a quien lo invoca, situaciones no concurrentes en el presente caso.

Controvierte entonces que la aseveración de que la información solicitada sea una información privada, pues soslaya analizar todo el procedimiento administrativo en virtud



del cual los antecedentes solicitados obran en poder de la Administración del Estado, en materias propias de su competencia, en cuanto a la producción de mitílidos y en el cumplimiento de la regulación sanitaria y ambiental y la inocuidad alimentaria para la población humana. Es decir, dicha información ha servido de fundamento para la toma de decisiones públicas.

Contextualiza que la mitilicultura se desarrolla, principalmente, en bienes nacionales de uso público, por ello requiere de concesiones y autorizaciones previas, debiendo considerarse que el incumplimiento de la normativa sectorial por parte de las empresas acuícolas puede incluso conllevar la caducidad de las concesiones que le han sido otorgadas. Así la actividad acuícola no sólo es una actividad económica que está regulada pormenorizadamente, en la Ley de Pesca y Acuicultura sino que además se trata de una actividad cuyo proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la ley N° 20.417, que reformó la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente, a fin de obtener la respectiva resolución de calificación ambiental, que permita su materialización, siendo la capacidad de producción, sin duda es uno de los elementos a considerar para obtener favorablemente dicha resolución de calificación ambiental.

Sustenta que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la decisión de amparo Rol C-7916-22



no afecta los derechos económicos y comerciales de la reclamante, por lo que no se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de transparencia. Es así como no se ha acreditado que la entrega de la información requerida proporcione ventajas comparativas indebidas en el mercado de mitílicos.

En efecto, la publicidad debe dañarlos o afectarlos negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada, daño que no cabe presumir, sino que debe ser acreditado por los órganos administrativos o terceros que tiene alguna probabilidad de ocurrir, empleándose el denominado “test de daño”, por lo mismo, no es suficiente para reservar la información requerida, como lo hace el reclamante, de efectuar alegaciones generales sobre los eventuales riesgos anticompetitivos e incluso hacer referencias de paso a ventajas competitivas.

Añade que la entrega de la información no afecta antecedentes comerciales sensibles, ni información protegida por el secreto empresarial, ya que no se indica específicamente cuál es la planificación estratégica de cada unidad empresarial, o qué decisiones productivas y de financiamiento se verían afectadas y los datos que se solicitan no son antecedentes sensibles de la actividad productiva en análisis, situación que ha sido confirmada por fallos que cita de esta I. Corte de Apelaciones como de la Excma. Corte Suprema.



Arguye, a su vez, que el legislador no exige acreditar un interés público para acceder a información en el contexto de la Ley de transparencia, pues, para obtener ésta, sólo es necesario que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado y que no se configuren causales de reserva, lo que va en concordancia a los principios de facilitación y de no discriminación.

En consecuencia, concluye que la decisión de Amparo Rol C7916-22 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y la Ley de Transparencia, no configurándose las ilegalidades alegadas por la reclamante, por lo cual debe ser rechazado en todas sus partes.

Adjunta a su informe:

a) Decisión de Amparo Rol C7916-22, adoptada por el Consejo para la Transparencia el 20 de diciembre de 2022.

b) Solicitud de acceso a la información, presentada por don Hernán Espinoza Zapatel con fecha 3 de agosto de 2022, ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA).

c) Resolución Exenta N° 452, de 19 de agosto de 2022, por medio del cual SERNAPESCA denegó la información solicitada.



d) Ficha Reclamo C7916-22 presentado por don Hernán Espinoza Zapatel, en contra de SERNAPESCA, con fecha de recepción 21 de agosto de 2022.

e) Ord. N° 19757, de 27 de octubre de 2022, mediante el cual SERNAPESCA evacuó sus descargos.

f) Presentación de fecha 22 de noviembre de 2022, por medio de la cual la reclamante evacuó traslado al amparo.

g) Sentencia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de diciembre de 2022, en los autos Rol N° 389-2022.

3°.- Que, consta del proceso que con fecha 3 de marzo de 2023, se certificó que no fue evacuado traslado conferido por el tercero interesado Hernán Espinoza Zapatel, encontrándose vencido dicho plazo.

4°.- Que, como es posible advertir, la discusión central estuvo en determinar la concurrencia del carácter público de la información requerida, contenida en la decisión de Amparo Rol C 7916-22, adoptada el 20 de diciembre de 2022, que determinó que se: “Entregue al reclamante la información referida a las cosechas o producciones obtenidas y declaradas, en el periodo y en los centros de engorda de mitílidos que se indican, identificados por su Registro Nacional de Acuicultura, ubicados en la Región de Los Lagos, de acuerdo con lo señalado en numeral 1° de lo expositivo del presente Acuerdo”, por estimarse que la información requerida era pública, que obra en poder de la institución y, asimismo, por haberse



desestimado la afectación a los derechos comerciales y económicos de las empresas que se opusieron a la entrega, teniéndose en consideración, además, que existe un evidente interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes, al encontrarse vinculada con información ambiental, todo de conformidad a lo dispuesto en el art. 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, los artículos 5, 10 y 11, letras a), c) y d), y el 21 N° 2 todos de la ley N° 20.285.

5°.- Que, determinado el ámbito de la discordia, cabe señalar que el sustrato jurídico que presupone el presente reclamo de ilegalidad considera en primer lugar lo dispuesto en el inciso segundo del **artículo 8° de la Carta Fundamental**, donde se expresa que: *“son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”*

Tal consagración de la garantía constitucional determinó la promulgación, con fecha 20 de agosto de 2008, de la **Ley Número 20.285**, sobre Acceso a la Información Pública, la cual en su **artículo 32** dispone que: *“El consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el*



cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información”.

En su **artículo 3°** preceptúa que: *“La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.”*

Luego, su **artículo 4°** de esa misma ley dispone que: *“Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública”.*

Y se agrega por el **inciso segundo de ese artículo 4°** que, *“El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.”*

Asimismo, el **artículo 2°**, indica en su **inciso primero** que *“Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.*

El **artículo 10**, precisa que: *“Toda persona tiene derecho*



a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.”

El **Artículo 11 letra c)**, precisa que “El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:

c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

A su tiempo el **artículo 13**, señala que “En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante.”



El **artículo 15** dispone que “...cuando la información esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido su obligación de informar.

En tanto que, el **artículo 21**, indica que “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera



distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, y;

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.

6º.- Que, establecido el marco constitucional y legal aplicable en la especie, se hace necesario ahora precisar lo esencial de los cuestionamientos planteados por la reclamante de autos, que conforme a lo ya explicitado en los motivos precedentes se enmarcaron en la solicitud planteada por el requirente de la información, Hernán Espinoza Zapatel, referido a la entrega de información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo que señala, por los



centros de engorda de mitílidos que se indican que originalmente se habían pedido del Servicio Nacional de Pesca Región de Los Lagos, institución que los negó lo que motivó el presente asunto.

7°.- Que, el principal cuestionamiento sería la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la citada ley, por afectación de sus derechos comerciales y económicos, frente a lo cual la decisión de la autoridad recurrida debidamente fundó en que la información requerida fue entregada a SERNAPESCA, en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley General de Pesca y en el D.S. N°129/2013. De este modo, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, dicha información es de carácter pública, salvo la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva, señalando para ello que el Decreto Supremo N°129, año 2013, del Ministerio de Economía, que fijó el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen – en adelante D.S. N°129/2013- en su artículo 6, señala que “los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura o quienes éstos designen, deberán entregar la información a que se refiere el presente reglamento”.

En el artículo 7, se dispone que “la información específica por cada centro de cultivo, que deben entregar las personas naturales o jurídicas a que se refiere el artículo anterior, será la



siguiente: a) En el caso de centros de cultivo cuyo proyecto técnico comprenda especies de peces, deberá especificarse, según corresponda: 1.- Abastecimiento: unidad de cultivo o lote de unidades de cultivo (estructuras de cultivo), según corresponda, recurso ingresado, identificación del centro de origen de los ejemplares, especificando el número de ejemplares y su peso, así como la etapa de desarrollo y/o actividad productiva en que se encuentran y el medio de transporte utilizado. Igualmente deberá declarar el ingreso de redes al centro de cultivo. 2.- Existencia: por unidad de cultivo, especie, número y peso de los ejemplares, especificando la etapa de desarrollo y/o actividad productiva en que se encuentran. 3.- Cosecha: tipo y fecha del evento, especie, número y peso de los ejemplares, así como la identificación del transporte utilizado y del documento tributario que respalda el movimiento. Respecto del destino del movimiento, se deberá identificar, según corresponda, la planta de proceso, centro de acopio o planta de faenamiento, o bien cualquier otro establecimiento al que se destinen los peces”. En cuanto a la oportunidad, condiciones y periodicidad de las declaraciones deben regirse por lo que a continuación se señala (artículo 8): “e) Cualquier otra información, de las enumeradas en el artículo anterior, deberá ser entregada mensualmente (...) La información deberá ser entregada al Servicio mediante el "Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (...)”.



8°.- Que, sobre la materia, se hizo presente que la extracción o producción acuícola no sólo es una actividad económica que está regulada pormenorizadamente, prescribiendo el decreto N°430, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.892, de 1989 y sus modificaciones, (en adelante, —Ley de Pesca y Acuicultura o —Ley de Pesca) en sus artículos 67 y siguientes que se requiere una concesión o autorización de acuicultura para ello, sino que además se trata de una actividad cuyo proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la ley N° 20.417, que reformó la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente, creando el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de obtener la respectiva resolución de calificación ambiental, que permita su materialización, siendo la capacidad de producción uno de los elementos a considerar para obtener favorablemente dicha resolución de calificación ambiental, eso relacionado con la ley N°19.300, que establece en su artículo 31 bis el acceso a la información ambiental, estableciendo que “toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública”, estableciéndose en el inciso



siguiente que es “información ambiental”: “toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración”, como es el caso de la información reclamada.

9°.- Que, por lo anterior es que la decisión en revisión de legalidad determinó fundadamente que existe un evidente interés público en el acceso a la información reclamada, por cuanto conocer la cosecha o producción que informa al órgano público requerido una determinada empresa, permite examinar si dicha actividad se está realizando conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas otorgadas para ello por la autoridad ambiental competente, lo que permite el escrutinio público sobre las propias empresas o entidades fiscalizadas por el respectivo órgano de la Administración, que permita apreciar el cómo se respeta la legislación que enmarca su actuación económica, en el terreno del ejercicio de la libertad de ejercer una actividad económica lícita, pero por cierto apegada a la Constitución y a las leyes.

10°.- Que, en lo que toca a las alegaciones de los terceros en orden a la configuración de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, sobre una eventual afectación de los derechos económicos y comerciales, lo cierto es que tal como recuerda la decisión en revisión, se exige que esa información sea secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente



se utiliza ese tipo de información; que sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y que tenga un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva y, por el contrario, su publicidad pueda afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo, sin que se adjuntaran antecedentes suficientes que acrediten una afectación presente y/o probable, y con suficiente especificidad a sus derechos comerciales y económicos, particularmente respecto a la afectación concreta a su desenvolvimiento competitivo o detrimento en su posición en el mercado, -proporcionándole, en contrapartida, con la divulgación de lo solicitado, una ventaja competitiva a sus competidores-, sin indicar específicamente cuál es la planificación estratégica de cada unidad empresarial, o qué decisiones productivas y de financiamiento se verían afectadas, omisiones que impidieron tener por configurada la causal de secreto o reserva que fue esgrimida.

11°.- Que, por lo que se viene señalando es que, la decisión reclamada, correctamente, fue del parecer de que, tratándose de información de naturaleza pública según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, respecto de la cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva de afectación a los derechos comerciales y económicos de los terceros, y demás alegaciones, ordenando la entrega de la información



referida a las cosechas o producciones obtenidas y declaradas, en el periodo y en los centros de engorda de mitílidos que se indican, identificados por su Registro Nacional de Acuicultura, ubicados en la Región de Los Lagos, de acuerdo con lo señalado en numeral 1° de lo expositivo del Acuerdo.

12°.- Que, conforme lo expresado en el artículo 32 de la Ley N° 20.085, es al Consejo a quien se le entrega el objetivo de *promover* la transparencia de la función pública como *fiscalizar* el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, para así *garantizar* el derecho de acceso a la información, competencia que no se encuentra limitada y que se extiende a todos los órganos sometidos a la ley respectiva, siendo que la expresión que utiliza el artículo 2°, al manifestar que las disposiciones “de esta ley” serán aplicables, no supone una limitación de sus efectos solo para los casos del artículo 1°, sino que su referencia lo es a toda la casuística contenida Ley N° 20.285, desde su artículo primero a undécimo y sus disposiciones transitorias, única interpretación armónica que permite una aplicación sistémica de todas sus disposiciones.

13°.- Que, en conclusión, aparece de toda evidencia que en este escenario, aparece legal y debidamente fundada la decisión adoptada por la reclamada, quien mediante la Decisión Amparo Rol C 7916-22, acogió el deducido por el



tercero interesado Hernán Espinoza Zapatel, ordenando la publicidad descrita en su parte decisoria.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara:

Que, se **RECHAZA** el reclamo de ilegalidad interpuesto por Daniel Lagos Sandoval, abogado, actuando en representación de Empresa Pesquera Apiao S.A., que fuera dirigido en contra del Consejo para la Transparencia, en relación a la dictación de la Decisión de Amparo Rol C-7916-22 de fecha 20 de diciembre de 2022, por la que se acogió el amparo de acceso a la información deducido en contra del Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Lagos, referido a la entrega de información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en un periodo determinado, en relación a los Centros de engorda de Mitílidos cuyos alcances se precisan en la misma resolución.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz.

N°Contencioso Administrativo-24-2023.





XLTXXEVOXRN

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M., Ministro Suplente Carlos Escobar S. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, tres de abril de dos mil veintitrés.

En Santiago, a tres de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>